



2. Despacho del Viceministro General

Doctor

JUAN ALBERTO DUQUE GARCÍA

Secretario General

COMISIÓN CUARTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Cámara de Representantes

Carrera 7 No 8-68, Edificio Nuevo del Congreso

Bogotá D.C.



Radicado: 2-2026-032181

Bogotá D.C., 27 de abril de 2026 17:28

Radicado entrada

No. Expediente 21179/2026/OFI

Asunto: Respuesta –Proposición 095 de 2026. Audiencia Pública del Proyecto de Ley No. 270 de 2025 Cámara “[p]or medio del cual se modifica la Ley 80 de 1993, que expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Radicado 1-2026-031172 y 1-2026-042389)

Respetado Doctor Duque:

En atención a la comunicación identificada en el asunto, mediante la cual se remitió citación para debate de control político correspondiente a la Proposición 095 de 2026, la cual tiene como propósito “(...) *escuchar a las entidades y a los diferentes grupos de interés en relación con sus perspectivas, inquietudes, comentarios y observaciones sobre las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley 270 de 2025 Cámara «Por medio del cual se modifica la ley 80 de 1993 que expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública»*”, y en atención a las comunicaciones allegadas por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI¹ por las que trasladó por competencia el interrogante 4 de la proposición 095 de 2026; el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actuando en el ámbito de las competencias establecidas en el Decreto 4712 de 2008², se permite responder en los siguientes términos:

1. ¿Qué comentarios tiene su entidad respecto al Proyecto de Ley 270/25 Cámara de Representantes?

Respuesta. Al respecto, se precisa que la iniciativa en mención se encuentra pendiente de discutir el informe de ponencia positivo propuesto para primer debate que consta en la Gaceta del Congreso No. 2140 del once (11) de noviembre 2025.

Ahora bien, en desarrollo del trámite legislativo y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, las áreas técnicas de esta Cartera se encuentran analizando el proyecto de Ley, con el fin de revisar la consistencia de los costos fiscales propuestos, las posibles fuentes de financiación asociadas y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Adicionalmente, se está analizando el impacto que las medidas allí incorporadas pueden representar respecto del proceso contractual de la entidad.

Una vez concluido este estudio, se emitirá el respectivo concepto en el menor tiempo posible, el cual será remitido al Congreso de la República y se compartirá copia del mismo.

¹ Radicados No. 1-2026-035942 y 1-2026-035566

² Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.



Continuación oficio

2. Bajo el modelo actual de contratación en su entidad ¿cómo se desarrolla los desafíos y objetivos misionales propios y cómo alteraría la mencionada iniciativa legislativa el proceso de contratación?

Respuesta. La Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el área que tiene a cargo las funciones de dirigir, administrar, coordinar y hacer seguimiento a los procesos contractuales relacionados con el recurso humano, financiero, físico y de bienes y servicios de la entidad.

En este orden de ideas, sin perjuicio del análisis integral de la iniciativa, la Dirección Administrativa destacó los siguientes puntos como posibles alteraciones que se podrían generar en el marco de la misionalidad y desarrollo propio de proceso contractual de la Cartera:

- Respecto de los artículos 3 y 4, la limitación de la contratación con privados en los casos de obras públicas y prestación de servicios podría generar una sobrecarga significativa en las capacidades operativas, técnicas y administrativas de las entidades públicas, las cuales actualmente no cuentan, en muchos casos, con la capacidad logística suficiente para asumir directamente estas actividades.

En ese sentido, la implementación de esta medida implicaría necesariamente una revisión y ajuste de los gastos de funcionamiento, toda vez que el incremento en planta de personal, recursos logísticos y capacidad institucional podría conllevar a un proceso de reestructuración administrativa y presupuestal.

- Frente al artículo 10, la posible fijación de un porcentaje rígido del 20% para determinar afectaciones graves en toda la actividad contractual, podría resultar contraproducente en muchos de los procesos de vital importancia a cargo de la cartera ministerial que garantizan su misionalidad.

Así, el porcentaje puede resultar permisivo para los contratistas, en la medida en que limita la posibilidad de valorar adecuadamente otras situaciones que podrían presentar niveles de afectación distintos, pero que impacten de manera irremediable la ejecución del contrato.

En efecto, existen procesos y servicios inherentes al Ministerio que no admiten tolerabilidad alguna en el incumplimiento. Por tal razón, se considera que establecer un porcentaje de tolerancia rígido no resultaría conveniente.

Por ejemplo, permitir la posibilidad de incumplimiento del 20% para iniciar las acciones pertinentes, por ejemplo, en el contrato de soporte tecnológico para el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF, podría generar que desde el 1% del incumplimiento se generen afectaciones a las distintas entidades del Estado usuarias de este sistema.

- De manera general se considera importante verificar la necesidad de ampliar el contenido de los estudios y documentos previos, respecto de la determinación de los "*principios de la contratación*". Lo anterior, por cuanto esta determinación podría resultar inocua, en la medida en que no introduce un contenido sustancial adicional ni valor real al proceso.

Por el contrario, su incorporación podría generar una carga innecesaria en la etapa precontractual, al propiciar la inclusión de nuevos análisis o *sub-etapas* dentro de los estudios previos que no contribuyen de manera real a la eficiencia ni a la practicidad del proceso de contratación. En consecuencia, esta determinación podría derivar en una ralentización injustificada del trámite contractual.



Continuación oficio

- Finalmente, respecto del control ciudadano propuesto en el artículo 21 del proyecto de Ley 270 de 2025 Cámara, se sugiere que sea posible que la entidad establezca el término correspondiente para esta etapa, sin que este deba fijarse de manera obligatoria en diez (10) días, toda vez que ello podría prolongar innecesariamente los tiempos en algunos procesos o modalidades de contratación.

3. ¿Cuál es el valor total de los contratos en 2024 que licitan, contratan o concesionan con privados? Detallar en archivo en formato Excel.

Respuesta. Se adjunta archivo en formato Excel, en el que consta la relación para 492 contratos y/o convenios suscritos durante el año 2024 con terceros privados, por valor de \$**177.910.299.469,94**.

4. Realice una proyección presupuestal y temporal sobre cuándo y cómo la entidad podrá adoptar los cambios propuestos en la iniciativa legislativa ya descrita.

Respuesta: Frente al particular, se informa que, si bien existen disposiciones del proyecto normativo que pueden generar un impacto financiero para la entidad, en la actualidad no es posible realizar una proyección exacta presupuestal y temporal sobre la forma como se podrían adoptar los cambios propuestos. Lo anterior, en la medida en que su implementación dependerá de las particularidades que se presenten en cada caso.

En los anteriores términos se considera respondida su solicitud y se informa que cualquier duda adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por:

LEONARDO ARTURO PAZOS

GALINDO

LEONARDO ARTURO PAZOS GALINDO

Viceministro Técnico de Hacienda

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

DA/OAJ

Anexo: Documento en formato Excel "07 04 2026 PROPOSICIÓN"

Elaboró: Sonia Ibagón Avila - Oficina Asesora de Jurídica

Revisó: María Camila Pérez Medina - Oficina Asesora de Jurídica

Rosa Dory Chaparro Espinosa - Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Nicolas Escobar Forero - VG